



La LGT-14 (Ley General de Telecomunicaciones) establece un plazo de 1 año desde la publicación, es decir 11 de Mayo de 2015, para:

- legalizar a los operadores financiados directa o indirectamente con recursos públicos.
- adaptar los planes territoriales y urbanísticos a los principios de la LGT-14.

Los principios de la LGT están encaminados a fomentar la actividad:

- Libre competencia.
- Mínima intervención administrativa.

Desde el año 2003 que se creó el registro de operadores de telecomunicaciones, **se han creado 40.000 operadores**, es decir se ha conseguido aflorar mucha actividad económica.

Además de la dinamización del sector empresarial, **la ordenación del sector es esencial para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos**. Intervienen **derechos esenciales de las personas como es el secreto de las comunicaciones**, e indirectamente **la protección del menor**, pues sin orden se impide la persecución de delitos de esta y otras índoles.

Es cierto que la Ley adolece de algunos defectos como el reducir-ignorar el control administrativo local, pero no podemos pasar por alto que **los propios ayuntamientos consintieron este recorte en la fase de gestación de la ley al ignorar a los profesionales de las Telecomunicaciones**. Esta ley se aprobó con el apoyo del 90% del parlamento.

El cumplimiento de la ley por las entidades públicas se supone, pero en el presente caso **la falta de profesionales está demorando su cumplimiento, y la ignorancia de las consecuencias frivola sobre la importancia de su cumplimiento**. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones en Catalunya y desde el "Col·legi Oficial de Graduats d'Enginyers de Comunicacions Electròniques de Catalunya (COGECEC)" queremos recordar que **la única forma de garantizar el orden y los derechos de los usuarios es cumplir con la ley** y recordamos que hay suficientes profesionales en Catalunya para ayudar con los problemas que se puedan derivar.

En Catalunya se creó un organismo LOCALRET, entidad pública financiada con dinero público, con la finalidad de fomentar las redes de telecomunicación. Entidad que a la vista de la jornada celebrada el 9 de mayo de 2015 con motivo de la extinción de plazos se observa que no cumple con su función, llegándose a producir el efecto contrario. **El problema reside en que LOCALRET tiene contratos en semi-exclusiva con más del 90% de municipios de Catalunya impidiendo la competencia** y en consecuencia impide el desarrollo de la actividad relacionada con las telecomunicaciones que dice fomentar. Concretamente se impide a los profesionales ingenieros de la clase telecomunicaciones asesorar en aquellos ayuntamientos que tienen el contrato con dicha entidad. El caso es que un actor, LOCALRET, participan de las ventajas del dinero público para su financiación, de ser entidad pública para obtener trabajo y eliminar la competencia, y el resto los profesionales de la Ingeniería de Telecomunicación tienen recortadas sus posibilidades profesionales debido a la **distorsión que introduce LOCALRET en la competencia**.

En España, sin las entidades públicas locales con convenio con LOCALRET de Catalunya, durante este año han adaptado 700 planes territoriales y urbanísticos. **La razón por la que LOCALRET no ha cooperado con el cumplimiento de la ley ha sido que esta no se entendía, que es una excusa para esconder su falta de profesionalidad**. En consecuencia las garantías a los ciudadanos de nuestros ayuntamientos tanto en lo referente a las actividades económica como de los derechos de sus ciudadanos quedan mermados.

En cuanto al otro plazo, el de **la obligación de declarar a los operadores de telecomunicaciones mantenidos con recursos públicos, desde LOCALRET se banalizó y frivolisó sobre esta conveniencia, en lugar de acentuar la legalidad, los intereses económicos en juego y los derechos de las personas y de los menores que se encuentran en juego**.